

Estados Unidos y Colombia ante las crisis venezolanas



EDICIÓN 95 ENE-ABR 2019

En el cambiante e incierto contexto internacional, las crisis en Venezuela cobraron visibilidad para la administración estadounidense la cual ha endurecido la presión económica y ha reiterado que todas las opciones están sobre la mesa. Sin embargo, sectores del Ejército estadounidense prefieren un relativo aislacionismo, pues las experiencias recientes —en especial en Siria e Irak— han generado reticencia a involucrarse en intervenciones largas sin salida fácil. Más que una intervención militar masiva, señalan diversos analistas, Estados Unidos estaría estimulando un golpe militar por parte del ejército venezolano, por lo cual podría realizar acciones puntuales como bombardeos de objetivos claves. Con el impredecible Trump, frente al drama venezolano cualquier acción es posible si el presidente norteamericano la considera útil para fortalecerse en su país, ante la pérdida de gobernabilidad y los cuestionamientos internos que afectan su intento de reelección en 2020.

Las crisis venezolanas generadas por el chavismo las usa Trump, además, como bandera antisocialista para enfrentar el ascenso de Bernie Sanders y para mantener el voto de Florida. El asunto Venezuela le da la oportunidad a protagonismos cubano-americanos como el de Marco Rubio, quien ha insistido en que si Estados Unidos da una señal, las fuerzas armadas y el pueblo venezolano se levantarían para sacar a Maduro.

Ese fue el sentido de la jornada del 23 de febrero, aunque resultaba contradictorio pretender ingresar unos paquetes de comida o de medicinas a Venezuela y simultáneamente, asfixiar los ya escasos

recursos financieros que aún conserva el país vecino. El uso político y la manipulación de ese drama, ahuyentó la participación de organismos multilaterales que habrían garantizado la eficacia en la entrega de la ayuda, los cuales actúan solo bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, como lo recordó la Cruz Roja antes del 23F. Maduro recurre a esas paradojas para achacarle a la intervención estadounidense la catástrofe económica, humanitaria, eléctrica, y de todo orden que ha incubado el régimen chavista en estos 20 años de control del poder, y que ha obligado a millones de venezolanos a salir huyendo de su país.

La jornada no logró entregar la ayuda a Venezuela. El intento fracasó por varias razones: por haber utilizado una emergencia humanitaria como instrumento político, por el exceso de expectativas que había generado Guaidó y por los errores de la conducción opositora. El régimen chavista impidió el ingreso de la ayuda con el bloqueo del puente y con policías, guardias y colectivos que incluían hasta presos sacados para una acción armada irregular, y a estos grupos respondieron sectores opositores con una resistencia violenta. Al final se evaporó la expectativa de una inmediata salida de Maduro y aumentó la incertidumbre.

Además del cerco diplomático, del uso de la ayuda humanitaria y de las sanciones económicas para presionar la salida de Maduro, la administración Trump ha ido poniendo entre las opciones disponibles el uso de la fuerza como arma disuasiva. En esa perspectiva llevó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la crisis venezolana, aunque de antemano sabía que no había posibilidad alguna de aprobación por el seguro veto de Rusia y China. En la primera sesión trató de legitimar su propuesta ante la imposibilidad de darle una cierta base de legalidad; en la segunda señaló la crisis venezolana como amenaza a la seguridad, y apeló a la protección de los nacionales ante la catástrofe humanitaria.

“Además del cerco diplomático, del uso de la ayuda humanitaria y de las sanciones económicas para presionar la salida de Maduro, la administración Trump ha ido poniendo entre las opciones disponibles el uso de la fuerza como arma disuasiva”.

El cerco diplomático/financiero ha sido visto por la administración Trump y por sus aliados como medios antagónicos a la negociación, para concretar una transición en Venezuela. Esa estrategia aleja la posibilidad de negociar una salida pacífica y democrática, pactada por las fuerzas políticas y sociales venezolanas. Pero si las sanciones no generan la presión esperada y si, pese al reconocimiento de Guaidó como presidente interino por parte de 61 gobiernos, el cerco diplomático no logra su objetivo, ¿qué opción queda?, ¿la militar?

El protagonismo del principal aliado de Trump

Ante la exacerbación de la crisis venezolana y sus efectos en Colombia, Iván Duque, en el momento en que era congresista, demandó a Maduro en la CPI (Corte Penal Internacional); tan pronto se posesionó, retiró a Venezuela de su función como garante de la Mesa de Negociación con el ELN y se consagró, como Maduro, a la diplomacia del micrófono, tal vez teniendo en su mira jugar un papel protagónico en

la búsqueda de salidas a la crisis venezolana.

El Gobierno de Colombia —en particular el presidente, su canciller y su embajador en Estados Unidos— ha mostrado con su presencia, declaraciones y silencios, compartir la estrategia de Trump frente a Venezuela, y ha mantenido, además, una peligrosa ambigüedad sobre una eventual intervención militar.

¿Podía el gobierno dejar pasar en silencio la nota que exhibió el asesor de seguridad John Bolton, en la que anunciaba 5.000 tropas para Colombia?, ¿qué mensaje lanzó el canciller, dentro y fuera del Grupo de Lima, al no firmar, en septiembre de 2018, la declaración de rechazo al uso de la fuerza?, ¿por qué en la reunión en Washington, Trump habló y Duque solo asintió? Después de ese encuentro, el presidente Duque multiplicó declaraciones contra el régimen chavista y de respaldo a la oposición, al punto de que la reemplazó en la conducción de las jornadas del 22 y 23F, y le dio honores de jefe de Estado a Juan Guaidó.

Gobiernos como el de Brasil mantuvieron una posición más discreta. Por acción de Itamaraty, la cancillería, Brasil no participó en el intento de pasar ayuda, y Bolsonaro, presidente de este país, recibió a Guaidó en visita informal; en cambio, Colombia propició que la iniciativa latinoamericana se volviera “made in USA”, acopió en territorio colombiano la mayor parte del cargamento de comida y medicinas enviado por Trump, y sin consultar en forma suficiente a los demás miembros del Grupo de Lima, invitó al vicepresidente Mike Pence a la reunión del Grupo en Bogotá. ¿Se requería ese protagonismo personal e involucrar a la administración Trump en la iniciativa suramericana para dinamizar a ese Grupo regional?; no lo parece. Más bien, el involucramiento estadounidense suscitó mucha molestia entre países miembros de esa agrupación, que puede haber quedado muy afectada.

Sin embargo, la actuación de Duque le produjo réditos internos; le dio un hilo conductor a su gobierno, impactó a su favor las encuestas de opinión, aglutinó diversos sectores del uribismo y le ayudó a desviar la atención frente a asuntos internos.



Juan Guaidó durante marcha en Caracas en febrero 2019 | Alex Cabello | CC BY-SA 4.0

Riesgos y costos

Las actuaciones del gobierno colombiano plantean otros muchos interrogantes: ¿conviene que el mayor vecino de Venezuela, el país más estrechamente articulado y el más afectado por la crisis de ese país, enfrente así la situación?, ¿qué alcance puede tener la advertencia del gobierno de Estados Unidos en el sentido de que, “si tocan a Colombia”, actúa?, ¿es acaso un reconocimiento al gobierno de Duque que le está haciendo bien la tarea?, ¿muestra la disposición a lanzar algún ataque, aprovechando cualquier incidente en la frontera o uno de los traspasos de la línea limítrofe que han venido haciendo las fuerzas militares venezolanas y ante los cuales Colombia ha procurado actuar con mucha cautela para evitar caer en la provocación?, ¿está el gobierno de Duque ignorando que el chavismo aún tiene peso político en la sociedad y entre los militares, quienes se forman en la hipótesis de un probable conflicto bélico con Colombia por el diferendo territorial?

“¿Conviene que el mayor vecino de Venezuela, el país más estrechamente articulado y el más afectado por la crisis de ese país, enfrente así la situación?”

Ahora bien, si miramos la actuación del gobierno colombiano en el contexto mucho más amplio de la

geopolítica global, surgen también graves interrogantes. Tanto Estados Unidos como China y Rusia tienen intereses de largo plazo en los recursos naturales, energéticos y minerales de Venezuela y de toda Suramérica; por eso, en el trasfondo de la crisis venezolana, las tres potencias forcejean por fortalecer y ampliar su influencia regional. La Venezuela chavista se ha mostrado cercana a Moscú y a Beijing, y decididamente opuesta a Washington, y para la visión geopolítica estadounidense resulta seguramente inaceptable la consolidación de Venezuela como otra Cuba en Suramérica, y como posible bastión de alianza política e influencia rusa y china.

Al mismo tiempo, el gobierno de Duque parece interesado en cobrarle a Cuba su colaboración en la negociación de los conflictos armados. Como es conocido, Cuba colaboró generosamente en las negociaciones con las Farc y estaba haciéndolo también en las conversaciones con el ELN. La insólita negativa del gobierno colombiano a reconocer y respetar los protocolos establecidos con el ELN, y su exigencia de que el gobierno cubano detenga a los negociadores de esa guerrilla y los entregue a la justicia colombiana, pone en riesgo la relación con la isla, cierra la puerta a todos los posibles garantes futuros y permite que Washington llegue a calificar al gobierno de La Habana como colaborador con el terrorismo. Si a esto le sumamos la tensión de Colombia con Nicaragua, que ahora pretende extender sus áreas marítimas en el Caribe, podemos decir que tenemos una relación hostil con los tres países que en la región conforman, según Trump, el “eje del mal”; ¿quiere Duque insertarse en ese contexto como el muro de contención y la plataforma de influencia regional de los Estados Unidos?

El gobierno colombiano no parece haber sopesado los riesgos y consecuencias en distintos escenarios de salida de las crisis en Venezuela; si la comunidad internacional se fatiga y Maduro permanece en el poder, le pasará altas cuentas de cobro a Colombia, y si Maduro cae, un gobierno de transición tendrá que incluir no solo a la oposición sino también al chavismo, con el que el gobierno colombiano se ha enemistado. Las mismas fuerzas militares y policivas chavistas, fuertemente anticolombianas, no podrán ser sustituidas de la noche a la mañana. La difícil construcción de un acuerdo nacional básico en Venezuela, el proceso de ajuste y recuperación económica, de reconstrucción de la infraestructura y los servicios sociales fundamentales llevarán años.

Problemas compartidos y solución consensuada

Colombia puede actuar de forma precisa y discreta si se concentra en la acción multilateral global, latinoamericana y caribeña. Pero el activismo unilateral o de la mano con Estados Unidos, y el menosprecio gubernamental por los espacios de acercamiento regional le impiden controlar los riesgos y costos en esta grave situación con su vecino, más aún en medio de la ruptura de relaciones.

La vecindad de Colombia y Venezuela es para siempre, realidad que los centros políticos nacionales parecen olvidar. De hecho, el régimen de Maduro y el gobierno de Duque han abandonado la acción conjunta y coordinada frente a las múltiples interacciones binacionales sobre indígenas o migrantes, ecosistemas estratégicos, mercados de trabajo, circuitos migratorios y problemas de seguridad generados por ambos lados.

El colapso de Venezuela y las sanciones financieras profundizan el drama humanitario y presionan a la fuga de un número creciente de venezolanos en busca de oportunidades, ingresos, servicios, y refugio

de opositores y desertores militares, y el primer país al que llegan es Colombia. Por otra parte, los problemas de seguridad se intensifican con la presencia del ELN, las disidencias y otros grupos armados a ambos lados de la frontera, que podrían ser utilizados como punta de lanza contra Colombia. Pero esta coyuntura, grave e incierta, parece que solo se la mira desde el centro político nacional a partir del polarizado juego político interno.

Aprovechando la ruptura de relaciones y el cierre de los pasos limítrofes formales y de los canales entre ambos países, el “orden” en la frontera lo seguirán imponiendo grupos irregulares que controlan flujos ilegales y negocios ilícitos: organizaciones criminales binacionales, tráfico de drogas y minería ilegal. Bien vale la pena examinar qué modalidades podrían usarse para atender estos problemas en ausencia de relaciones diplomáticas, y cómo recuperar experiencias anteriores que ayudaron en coyunturas críticas; como, por ejemplo, el trabajo de académicos y medios de comunicación que en el pasado ayudó a generar conocimiento mutuo y a establecer y/o fortalecer nexos positivos entre diversos sectores de los dos países.

Desde distintas naciones de América Latina, firmantes de universidades colombianas, brasileñas, ecuatorianas, peruanas y chilenas han hecho un llamado apremiante a poner en marcha acciones ciudadanas para evitar una salida violenta o una intervención que involucre a la región en confrontaciones globales y, en cambio, ayudar a una transición con elecciones libres, el restablecimiento del Estado de Derecho y el comienzo de la reconstrucción.
